

ESCRITO DE ALEGACIONES AL PROYECTO DE REAL DECRETO DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS CENTROS PRIVADOS DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

A LA SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES

La Federación Nacional de Asociaciones de Esteticistas (FANAE), con CIF G-79884359, representada por M. Concepción Vela Fernández en calidad de presidente, con DNI 51905320R; la Asociación Nacional de Empresas de Imagen Personal (ANEIP) con CIF G-81912503, representada por Juan Hernández Gil en calidad de presidente, con DNI 19005285V y la Asociación Nacional de Empresarios de Peluquería, Estética e Imagen Personal (ANEPE-IMPE), con CIF G-22300040, representada por D. Diego Noel Sanz Ejarque en calidad de presidente, con DNI 29119102K. Ambas tres entidades, que representan al 100% de los empresarios del sector de imagen personal, tal como acredita la Resolución de 10 de octubre de 2024, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo de peluquerías, institutos de belleza y gimnasios, BOE de 10 de octubre de 2024, y com domicilio a efectos de notificaciones en C/Miguel Servet 41, Local, 50013 de Zaragoza y correo electrónico info@patronalimagenpersonal.org, ante este Ministerio comparece y, como mejor proceda en Derecho,

EXPONE

Que, habiéndose abierto el trámite de audiencia e información pública del *Proyecto de Real Decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional integrados en el sistema educativo, y por el que se regulan los centros asociados y los centros de segunda oportunidad en el Sistema de Formación Profesional, y la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional*, y estando dentro del plazo legalmente establecido, formula las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- Vulneración del Principio de Igualdad (Artículo 14 de la Constitución Española) y creación de una discriminación arbitraria por razón de la titularidad del centro y el modelo organizativo.

El texto proyectado impone de manera exclusiva a los centros de titularidad privada un régimen de cargas obligatorias desproporcionadas (tales como la aportación de un Plan de Continuidad frente a cese de actividad, rígidas exigencias estructurales o auditorías cuatrienales bajo apercibimiento de revocación) de las que se exime de facto a los centros públicos, configurando un marco normativo asimétrico.

El objeto y fin superior de la legislación en materia de Formación Profesional es garantizar el derecho a la educación y asegurar la calidad de la formación, con independencia del carácter público o privado del centro. Sin embargo, la norma introduce estándares duales que penalizan a la iniciativa privada sin que exista una justificación objetiva y razonable. La calidad pedagógica y el rigor del título oficial dependen de los recursos docentes y del proyecto educativo, no de la naturaleza jurídica de su titular ni de la imposición de modelos organizativos ajenos a la realidad del sector, vulnerando el artículo 14 de la Constitución Española.

SEGUNDA.- Infracción grave de la libertad de empresa (Art. 38 CE) y del derecho a la libertad de creación de centros docentes (Art. 27.6 CE) por la imposición de un modelo inviable de pluridisciplinariedad y coexistencia simultánea de niveles (Básico, Medio y Superior).

El borrador del Real Decreto plantea exigencias de autorización y mantenimiento que obligan a los centros presenciales a abarcar pluralidad de familias profesionales y a impartir simultáneamente todos los niveles educativos (Grado Básico, Grado Medio y Grado Superior), o bien restringe de forma radical la viabilidad de los centros especializados.

Esta imposición regulatoria ignora por completo la estructura real del tejido empresarial y formativo privado en España. La gran mayoría de los centros privados de FP presenciales privados son **centros monográficos o especializados** (centros dedicados en exclusiva a sectores como la peluquería, la estética, la sanidad, las artes, la música, el patronaje, la informática de nicho, etc.), los cuales imparten con altísima calidad ciclos de una sola familia profesional y niveles muy concretos.

Obligar a estos centros a implantar múltiples familias profesionales ajenas a su especialidad, o a ofertar obligatoriamente Grados Básicos, Medios y Superiores de manera simultánea, constituye una **coacción regulatoria de imposible cumplimiento material y económico**:

1. **Inviabilidad espacial y material:** Los talleres, laboratorios y equipamientos específicos requeridos para una familia profesional concreta (por ejemplo, aparatología estética avanzada o infraestructuras de peluquería/arte) no son extrapolables ni compatibles físicamente con los de otras familias, haciendo materialmente imposible albergar múltiples ramas en un mismo centro sin incurrir en costes ruinosos.
2. **Quiebra de la especialización y la excelencia:** La exigencia horizontal generalizada destruye los centros de excelencia sectorial especializados, forzándolos a una "generalización" mediocre o a la clausura directa.
3. **Desviación de la función pública:** Se pretende imponer a la iniciativa privada la obligación de asumir la totalidad de la oferta educativa (incluyendo la absorción asistencial de Grados Básicos), una responsabilidad de cohesión social que corresponde sufragar y garantizar a las Administraciones Públicas a través de su propia red de centros públicos.

El problema del abandono escolar de los grados básicos no es una cuestión que deba echarse a las espaldas de los centros privados. Es una cuestión de que ver su contenido, formato, programación... Que siendo que ahora se imparten casi exclusivamente en centros públicos y concertados y estemos en el vagón de cola a nivel mundial de absentismo no se mejora obligando a centros privados a implantar un grado que se ha visto innecesario, al menos en nuestro sector y es que implementar un grado básico con una duración de 2000 horas en las que se aprenden los mismos conocimientos prácticos que los que se aprenden en sendos certificados de profesionalidad de nivel 1 en 450 horas produce una desmotivación al alumnado, que al elegir un Grado Básico creía dirigirse hacia una formación profesional y lo que se encuentra es más teoría casi que en tercero y cuarto de la ESO que es lo que querían evitar. El abandono escolar es el resultado normal de esa mala implementación del contenido de los grados básicos y el escalofriante abandono que se viene registrando.

Como decimos, la solución no es traspasar este problema vía Real Decreto a los centros privados. La solución está en pensar cómo mejorar los Grados Básicos para que los alumnos sientan y tengan ganas de terminar los que empiezan y no los abandonen, sean impartidos en centros públicos o privados.

Esta barrera de entrada y mantenimiento vulnera frontalmente la **libertad de empresa (artículo 38 CE)** y el **derecho a la creación de centros docentes (artículo 27.6 CE)**, al suponer una intervención estatal desproporcionada que vacía de contenido el ejercicio de la actividad económica y conculca los principios de necesidad, proporcionalidad y seguridad jurídica de la Ley 40/2015.

TERCERA.- Desviación de poder y quiebra del principio de seguridad jurídica (Artículo 9.3 CE) en relación con las exigencias de infraestructuras, recursos y perfiles de oferta formativa.

El proyecto normativo exige a los centros privados unos estándares de exclusividad inmobiliaria, dotación tecnológica disruptiva y mantenimiento multisectorial sumamente punitivos. Esta rigurosidad contrasta intensamente con la flexibilidad de espacios y la compartición de edificios públicos de la que disfruta la red pública bajo el amparo de la "planificación educativa".

Se ha de recordar al legislador, por si desconoce sus normas anteriores, que ya opera una discriminación positiva antes de este nuevo ajuste de tuercas a la formación privada, que también raya la inconstitucionalidad por discriminar positivamente a los centros públicos en el artículo primero del Real Decreto 658/2024, de 9 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, y el Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional.

Someter a los centros privados presenciales —especialmente a los independientes y especializados— a un régimen de requisitos genéricos e inflexibles que desprecian la especialización sectorial genera una absoluta indefensión jurídica. La norma, tal y como está redactada, no persigue una genuina garantía de calidad, sino un efecto expulsivo encubierto que provocará el cierre masivo de centros privados de sectores clave (peluquería, estética, artes, patronaje, etc.), vulnerando el principio de confianza legítima y seguridad jurídica consagrado en el artículo 9.3 de la CE.

Deben tener en cuenta los empresarios de este sector observan una mejor cualificación de los alumnos que han cursado sus estudios a en centros privados antes que los públicos. Se nota una gran diferencia entre unos y otros alumnos en cuestiones como la atención al cliente y sus destrezas o competencias prácticas, así como su formación en técnicas más actuales, lo que favorecen su inserción laboral.

Si a eso unimos que según se nos traslada del INE que los centros públicos tienen un coste económico a las arcas del estado o de las comunidades autónomas de unos 8,5 euros/ hora/alumno cuando en los centros privados cuesta del orden de unos 5 euros/hora/alumno casi es mejor que en lugar de presionar tanto a los centros privados se fijen en qué están haciendo mejor esos centros privados para mejorar la oferta y el resultado final de la educación en los centros de titularidad pública.

Esta patronal se compromete a ayudarles en este sentido para que a la vez que consigamos ahorrar dinero a las arcas del estado o de las comunidades autónomas que tienen asignadas estas competencias por si podemos hacer una auditoría en ese sentido desde la objetividad de ser los que observamos el resultado de uno y otros centros al recibir los alumnos de ambas partes.

Pero en tanto no se mejoren los resultados formativos de los centros públicos es indispensable que eliminen estas exigencias a los centros privados no vayamos a perderlos porque nos quedaremos sin profesionales bien formados de golpe si solo siguen operando centros públicos. El problema es de una importancia vital para un sector en el que el centro privado es quien suministra profesionales provenientes de centros especializados en nuestro sector de forma exclusiva y sobre todo solo de los niveles de grado medio en su inmensa mayoría porque es la oferta laboral más abundante en todas las oficinas de empleo de todas las comunidades autónomas. Pueden consultar estos extremos.

CONCLUSIÓN / SOLICITUD

Por todo lo expuesto,

SOLICITA A LA SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL: Que tenga por presentado este escrito, por formuladas las alegaciones en él contenidas, y que, en su virtud, proceda a la **revisión y modificación profunda del Proyecto de Real Decreto** objeto de tramitación, de modo que:

1. **Se respete y proteja la especialización sectorial**, eliminando cualquier obligación de impartir múltiples familias profesionales o de asumir simultáneamente todos los niveles educativos (Grado Básico, Medio y Superior), permitiendo expresamente la existencia y autorización de centros monográficos y especializados en una sola familia o sector profesional en aquellos sectores tan específicos como el nuestro en que las aulas con camillas, espejos tocadores... no sirven para otro tipo de enseñanza ni son centros especializados en lidiar con el abandono escolar galopante de los grados básicos, lo que haría cerrar la totalidad de centros formativos privados del sector con su consiguiente destrucción de empleo y posterior escasez de profesionales bien formados.
2. **Se supriman las exigencias discriminatorias y desproporcionadas** basadas en la titularidad privada, adaptando los requisitos a la realidad operativa de los centros presenciales para garantizar que la norma fomente la calidad sin destruir el tejido formativo existente de pymes y centros especializados.

En Zaragoza, a 1 de octubre de 2026.

29119102K
DIEGO NOEL
SANZ (R:
G22300040)

Firmado digitalmente
por 29119102K DIEGO
NOEL SANZ (R:
G22300040)
Fecha: 2026.10.06
18:01:59 +02'00'

Fdo.: Diego Sanz Ejarque (ANEPE-IMPE)

Presidente

HERNANDE
Z GIL JUAN -
19005285V

Firmado digitalmente por
HERNANDEZ GIL JUAN - 19005285V
Fecha: 2026.10.06 16:57:18 +02'00'

Fdo.: Juan Hernández Gil (ANEIP)

Presidente

Fdo.: M. Concepción Vela Fernández (FANAE)

Presidente



Fanae
Federación Nacional de
Asociaciones de Estética

Concha Vela
Gran Vía, 40 - 4º Des. 5
28013 MADRID
Tel.: 91 521 37 65
info@fanae.org
N.I.F.: G-79884359